



PARA USO INMEDIATO

Para más información contactar a:

Kristel Muciño, 202-797-2171 ó kmucino@wola.org

Responde Sociedad Civil Desplazada a Visita de Presidente Uribe

Washington DC, 16 de noviembre, 2006—La reciente visita del presidente colombiano Álvaro Uribe a Washington DC para hablar sobre la expansión a los tratados económicos entre EU y Colombia, ha causado la indignación de aproximadamente 48 organizaciones, quienes mandaron esta semana una [carta](#) al Congreso de EU, y promovido la visita de varios líderes de organizaciones defensoras de los derechos afro-colombianos, quienes sostendrán juntas con funcionarios del gobierno estadounidense para hablar sobre el impacto negativo de los tratados de libre comercio en territorios de afro-descendientes y el proceso de desmovilización.

La delegación estará en Washington del **16 al 20 de noviembre** y se reunirá con personal del Departamento de Estado, USAID, y el Congreso. El Congreso estadounidense se ha mostrado muy sensible a las preocupaciones de dichos líderes, sobre todo a las recientes amenazas contra el Sr. Petro por parte de nuevas denominaciones paramilitares formadas y vinculadas a las compañías productoras de la Palma Aceitera “Africana”. De igual manera le ha causado preocupación los desplazamientos, amenazas y hostigamientos contra las comunidades afro-colombianas y campesinas en semanas pasadas. La oficina del Congresista Payne estará auspiciando una sesión informativa en el Congreso para discutir esta situación.

La visita se da en un momento oportuno puesto que los Demócratas han empezado a expresar su preocupación con los tratados de libre comercio. **“Queremos impulsar en el Congreso una nueva agenda que asegure la protección de los derechos territoriales de las comunidades afro-colombianas e indígenas, y que garantice el derecho a la vida de los líderes y sus comunidades,”** puntualiza Gimena Sánchez, analista para Colombia en WOLA.

Entre las denuncias de estos líderes se encuentra el empleo de paramilitares desmovilizados como fuerzas de seguridad por parte de las compañías productoras de Palma Aceitera “Africana” en territorios que fueron titulados colectivamente, en donde se han cometido más de 113 crímenes y se ha destruido las zonas ambientales de reserva ancestral de estas poblaciones, y existe una apropiación ilegal de tierras desarrollada después de los desplazamientos internos causados por los paramilitares.

“Los paramilitares no han salido de nuestras tierras, y se refugian en los empresarios, mientras nuestras comunidades siguen en peligro,” afirma Enrique Petro, líder de las comunidades del Curvaradó.

El Ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Arias, ha reconocido públicamente que 25,000 hectáreas del territorio son de propiedad colectiva. Sin embargo, esa manifestación pública no ha evolucionado en el regreso real de las propiedades a sus legítimos dueños, y por el contrario, los afro-colombianos son denunciados como invasores por los empresarios.

“Nosotros esperamos que nuestros hermanos de Estados Unidos nos apoyen a proteger los territorios de las comunidades afro-colombianas que son patrimonio nuestro y de ellos,” expresa Ana del Carmen Martínez, representante de Cavida.

En un [reciente estudio](#) publicado por la Oficina para Colombia en Estado Unidos (USOC) se señala que en muchas regiones de Colombia todavía operan grupos paramilitares. **“El proceso de desmovilización no ha desmantelado las estructuras de poder de los grupos paramilitares. Los civiles en todo el país continúan sufriendo violencia y amenazas. Este problema es de control de tierras, de narcotráfico y del mantenimiento de su poder político,”** apunta Heather Hanson, de USOC.

La delegación, en donde también participan dos miembros de la ONG Comisión de Justicia y Paz, hace un llamado a las empresas estadounidenses que tienen acuerdos comerciales en estas comunidades a que se abstengan de hacer negocios con empresas colombianas implicadas en violaciones de derechos humanos y acciones ilegales de apropiación de tierras.

Para entrevistar a la delegación, favor de contactar a Kristel Muciño de WOLA al (202) 797-2171 ó kmucino@wola.org. Favor de encontrar las biografías de los miembros de la delegación abajo.

Danilo Rueda, entrenado en comunicación en la Universidad de Javeriana, y Abilio Peña, teólogo, son miembros fundadores de la Comisión de Justicia y Paz (CIJY), una organización de derechos humanos que acompaña a las comunidades en varias partes de Colombia, incluyendo las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó. El tipo de acompañamiento que la organización ofrece es integral: apoyo legal, educación, atención psicológica, construcción de comunidades y proyectos económicos alternativos son parte de su trabajo con las comunidades afro-colombianas y campesinas. La CIJY coordina campañas de solidaridad con sus contrapares en Estados Unidos y Europa, y también es parte de una red de organizaciones en América Latina que trabaja contra la impunidad. A través de los años, los miembros de la CIJY incluyendo el Sr. Rueda y el Sr. Peña, han sido sometidos a amenazas y ataques físicos, psicológicos y legales por su trabajo de acompañamiento, especialmente por su trabajo con las comunidades rurales desplazadas.

Ana del Carmen Martínez es miembro del equipo coordinador de CAVIDA, una organización civil compuesta de comunidades afro-colombianas al borde del río en Cacarica, la cual fue organizada para facilitar el regreso de estas comunidades a sus territorios después de haber sido desplazadas en 1997. Estas poblaciones regresaron a dos asentamientos en el 2000, Nueva Vida y Esperanza en Dios. A pesar de haber llegado a un acuerdo de reasentamiento con el gobierno colombiano, ese acuerdo no ha sido cumplido y los residentes de Esperanza en Dios han sido nuevamente desplazados en el 2002, cuando después formaron un nuevo asentamiento llamado Nuevo Espacio. CAVIDA promueve los derechos de los afro-colombianos de continuar con sus prácticas ancestrales del uso de la tierra. Los asentamientos de CAVIDA han sido declarados como Zonas Humanitarias con el apoyo de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos. CAVIDA se opone a megaproyectos y apoya el uso tradicional ecológico de las tierras. Los desplazamientos están relacionados a la actividad paramilitar e intereses económicos.

Enrique Petro es líder de las comunidades del Curvaradó y continúa denunciando la apropiación ilegal de territorios tradicionales de afro-colombianos por las compañías de Palma Aceitera "Africana" en la región. En 1997 los residentes del Curvaradó sufrieron un desplazamiento masivo de sus tierras tradicionales debido a las amenazas y violencia ocasionadas por los grupos ilegales armados. Desde entonces, Don Petro y otros han regresado a sus territorios ancestrales en el Curvaradó y establecido una Zona Humanitaria, en donde continúan sufriendo amenazas y violencia. En el 2005 Orlando Valencia, otro líder de las comunidades del Curvaradó, fue desaparecido y asesinado por paramilitares. Don Enrique y su familia han sido recientemente víctimas de crecientes amenazas por grupos armados que trabajan en colaboración con las compañías de Palma Aceitera "Africana" que han plantado ilegalmente en los territorios afro-colombianos.

###